

DECLARATORIA DE PATERNIDAD

Expediente de Casación 630
Registro Oficial Suplemento 319 de 01-ago-2012
Estado: Vigente

DECLARATORIA DE PATERNIDAD. Expediente 630, Registro Oficial Suplemento 319, 1 de Agosto del 2012.

Juicio No. 143-08- ex. 3ra. Mas.

Actora: María Lucía Barzola Rodríguez.

Demandado: Luis Aníbal Peñafiel Mejía.

Juez Ponente: Dr. Galo Martínez Pinto.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIA

Quito, 7 de diciembre del 2009; a las 16h40.

VISTOS: (No. 143-08 ex 3ra sala Mas).- Conocemos la presente causa como jueces de la Sala Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia en mérito a lo dispuesto en la segunda disposición transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial publicado ene. suplemento del Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo del 2009, en el numeral 4, literales a) y b) del apartado IV, DECISION, de la sentencia interpretativa 001-08-SI-CC pronunciada por la Corte Constitucional el 28 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre de ese mismo año, debidamente posesionados ante el Consejo de la Judicatura el 17 de diciembre último; y en concordancia con el artículo 5 de la resolución sustitutiva adoptada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión de 22 de diciembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero del 2009; y los artículos 184 de la Constitución de la República del Ecuador y 1 de la Ley de Casación. En lo principal, el demandado Luis Peñafiel Mejía, deduce recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segundo nivel expedida el 1 de octubre del 2007, a las 09h47 por la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la entonces Corte Superior de Justicia de Guayaquil que confirmó "en todas sus partes la resolución subida en grado, esto es la declaratoria de paternidad de Luis Aníbal Peñafiel Mejía en relación al menor Luis Aníbal quien llevará los apellidos Peñafiel Barzola...". Encontrándose el recurso en estado de resolución, para hacerlo, la Sala hace las consideraciones siguientes:

PRIMERA: Declara su competencia para conocer y resolver la presente causa por virtud de la disposición transitoria octava de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008, las normas señaladas en la parte expositiva de esta sentencia y la distribución efectuada en razón de la materia como consecuencia de la resolución adoptada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión de 22 de diciembre anterior, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009, ya citada.-

SEGUNDA: La parte recurrente considera infringidos, según el orden mencionado en su memorial, los artículos 118, 117 y 115 del Código de Procedimiento Civil; 277, 275, 273, 257, 131.2 y 132 del Código de la Niñez y Adolescencia, así como 23, numerales 26 y 27 y 24 numeral 17 de la Constitución Política de la República del Ecuador (vigente a esa época, esto es, la de 1998). Fundamenta su recurso en la causal primera (falta de aplicación de normas de derecho), segunda (falta de aplicación de normas procesales), tercera (falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba), cuarta (omisión en la sentencia de resolver en ella todos los puntos de la litis) y quinta (haberse adoptado en el fallo decisiones contradictorias e incompatibles)

del artículo 3 de la Ley de Casación.-

TERCERA: Como consecuencia del principio dispositivo contemplado en el artículo 168.6 de la Constitución de la República del Ecuador, actualmente en vigencia, desarrollado en el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, toca al recurrente la fijación de los límites dentro de los cuales se constriñe el recurso deducido, y, efectivamente así ha quedado establecido en el memorial del recurso planteado.-

CUARTA: Como se aduce en el recurso extraordinario planteado por el demandado la trasgresión de normas constitucionales corresponde, antes que nada, examinar el punto, pues, de comprobarse el cargo se tornaría innecesario el análisis de los demás. Arguye el recurrente, que en el trámite procesal de reconocimiento de paternidad se ha violentado los artículos 23 numerales 26 y 27 de la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente a esa época, esto es, la de 1998, así como también, -aduce- el artículo 24 numeral 17 de la misma normatividad suprema. Estas normas dicen relación a la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso y a no quedar en indefensión, nada de lo cual ha ocurrido en el proceso a más que, la argumentación del recurrente no explica ni demuestra de qué manera pudo haber ocurrido aquello constituyendo por sí un mero enunciado y, por lo mismo, no se acepta este cargo y se lo desestima.-

QUINTA: En el análisis de las causales invocadas al tenor de la ley de la materia, por orden lógico jurídico, corresponde examinar la causal segunda, quinta, cuarta, tercera y finalmente la primera; entendiendo obviamente que, de aceptarse los cargos por alguna de las primeras de ellas se tornaría inoficioso examinar las demás. Así entonces, estudiemos la causal segunda la que se configura por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, y siempre que hubieren influido en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente; doctrinariamente es conocida como de error in procedendo. La nulidad procesal se rige por los principios de especificidad y trascendencia; es decir, deben estar previamente consignados en la ley y, además, ser de tal naturaleza que la trasgresión de las normas que lo informan afecten en verdad sustantivamente el trámite procesal y que sean insuperables, esto es, insanables (artículos 349 y 1014 del Código de Procedimiento Civil). Aduce el recurrente que "no se aplicó la norma procesal determinada en el artículo 275 del Código de la Niñez y Adolescencia", el mismo que trata acerca del orden en que las partes presentarán los medios probatorios oportunamente anunciados, que los testigos podrán ser interrogados por los defensores de las partes y algo más en torno a la ruta procesal a seguir. Ajuicio del demandado, esta falta de aplicación, "dio lugar a que se haya viciado el proceso de nulidad insanable, provocando indefensión, influyendo en la decisión de la causa ya que la respectiva nulidad no ha quedado convalidada" Extraño argumento pues, en esa norma no se expresa que, de apartarse el juzgador de esa ruta, producirá nulidad ni nada que se le parezca; además qué tampoco menciona o demuestra en dónde se halla la irregularidad que pudiese haber producido la nulidad comentada y que, por lo demás, no se trata de aquellas que consigna el libro procesal civil, por lo que su argumentación no pasa de un mero enunciado y, por lo mismo, se lo desecha.-

SEXTA: Corresponde ahora examinar la causal quinta esgrimida por la parte recurrente. Esta causal hace referencia a casos en que la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la ley o en su parte dispositiva se adoptaren decisiones contradictorias o incompatibles. Uno de los requisitos exigidos es, sin duda, la motivación contemplada en los artículos 274 de la codificación del Código de Procedimiento Civil, 24 numeral 13 de la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, vigente a esa época, y 76,7 letra 1 de la nueva Constitución. La motivación jurídica, es un requisito esencial de todas las resoluciones de los poderes públicos dentro de los cuales se incluyen las sentencias y resoluciones judiciales, y actualmente, facultad esencial de los jueces el ejercer las facultades jurisdiccionales de conformidad con el artículo 130 numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial; requisito que comprende: a) enumeración de antecedentes de hecho y de derecho; b) la explicación de pertinencia de la aplicación de los preceptos jurídicos a los antecedentes de hecho, esto es, el porqué un determinado precepto jurídico es consecuencia jurídica directa y necesaria de un determinado antecedente de hecho. La motivación debe ser clara, expresa,

completa y lógica, pues, el Juez debe observar en la sentencia las reglas del recto entendimiento humano; y que podría afectarse por la falta de solo uno o más de los elementos señalados, sino por la existencia evidente de conclusiones arbitrarias o absurdas resolviendo contra ley expresa o contra los principios de la lógica jurídica. En esto es concordante el pensamiento de la doctrina en autores como Fernando de la Rúa, Vélez Mariconde, Manzini y que obligan a motivar racionalmente la sentencia; por eso, debe ser coherente, derivada -respetando el principio lógico de la razón suficiente- y adecuado a las normas de la psicología y experiencia común. Pero ocurre que, en la especie, la sentencia impugnada contiene los elementos formales y de fondo exigidos por la ley, por lo que la Sala no advierte ni falta de requisitos en la misma ni de motivación coherente en la **adopción** de decisiones contradictorias o paradójicas entre la parte motiva y la resolutive, por lo que la apreciación del recurrente queda otra vez en un mero enunciado sin explicar ni demostrar cómo y dónde del porqué de su perspectiva. Dice en la última página de su especie de alegato -y en donde supuestamente singulariza la explicación de este vicio- que "en la sentencia materia de la impugnación no se ha aplicado normas importantes y de imperativo cumplimiento propias del Código de Procedimiento Civil, del Código de la Niñez y Adolescencia, y de la Constitución de la República del Ecuador, que se han dejado de aplicar en la sentencia materia de la impugnación...", sin precisar, específicamente, cuáles normas son esas ni demostrar en qué parte del fallo están los supuestos vicios que aduce. Por consecuencia, tampoco se acepta este cargo y por las consideraciones anotadas se lo rechaza.-

SEPTIMA: La causal cuarta del artículo 3 de la ley de la materia alude al haber resuelto el fallo, aquello que no fuera materia del litigio u omisión de resolver en ella todos los puntos de la litis. En la página del memorial del recurso donde supuestamente se singulariza y explica el cargo atinente a cada uno, solamente expresa "no se resolvió la ilegalidad de la prueba documental impugnada del ADN, el que se adjuntó al proceso sin oficio de remisión de responsabilidad" sin que sea factible establecer qué normas de las invocadas de manera general al inicio de su escrito serían las aplicables a esta causal. Sin embargo, haciendo un esfuerzo mental cuando en realidad no existe casación de oficio, podría decirse que las normas que supuestamente se violentaron serían los artículos 131.2 y 132 del Código de la Niñez y Adolescencia. El primero, expresa que sin perjuicio de la utilización de otros medios de prueba que científicamente sean idóneos para demostrar la paternidad y en tanto ellos no sean utilizados, el Juez dispondrá, a petición de parte, el examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) del derecho habiente y del o la demandada; que no es otra cosa que efectivamente lo que se ha hecho y lo que han resuelto los juzgadores tanto de primero como de segundo nivel; y, la otra disposición que dice relación a las condiciones para la práctica de dichas pruebas biológicas estableciéndose una especie de cadena de seguridad para las mismas así como las demás condiciones técnicas para "garantizar la identidad personal de los sometidos al examen". Sobre el punto, y analizado el punto en su contexto señalamos que ha sido reiterada la jurisprudencia de la entonces Corte Suprema de Justicia estableciendo el valor científico de la prueba de ADN para identificar plenamente la línea genética correspondiente y que esa certeza, incluso está por encima de preceptos legales anacrónicos superados por el avance de la ciencia; así como que cuando el examen es practicado por la Cruz Roja Ecuatoriana, sus informes técnicos gozan de credibilidad científica institucional a tal punto que no caben exigencias formales como el de posesión y juramento de peritos comunes cuando son llamados por la administración de justicia para coadyuvar con su tarea, todo lo cual significaría el sacrificio de la justicia por cuestiones meramente formales.. Así está consagrado, entre muchos otros, en fallos de la GJ serie XVII, No. 1, página 38 (resolución 183-99, juicio 150-98 de la primera sala de lo Civil y Mercantil) de la entonces Corte Suprema de Justicia; GJ serie XVII, No. 8, página 2261 (resolución 367-01, juicio 192-01, publicado en el R. O. No. 490 de 9 de enero de 2002). Por lo expuesto, no está demostrado el cargo que se le imputa al fallo y por lo mismo se lo rechaza por impertinente e inoficioso.-

OCTAVA: Examinemos ahora el cargo por la causal tercera conocida como de violación indirecta de normas sustantivas por aplicación indebida o falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto. En la configuración de esta causal concurren dos trasgresiones sucesivas: la primera, violación de



preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, por cualquiera de los tres supuestos antes mencionados; y, la segunda violación de normas de derecho como consecuencia de la primera y que conduce a la equivocada aplicación o aplicación de estas normas materiales en la sentencia o auto. Por tanto, el recurrente, al invocar esta causal, debe determinar lo siguiente: 1. Los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que pudiesen haber sido violentados; 2. El modo por el que se comete el vicio; esto es, aplicación indebida, o falta de aplicación o errónea interpretación; 3. Qué normas de derecho han sido equivocadamente aplicadas o no han sido aplicadas como consecuencia de la trasgresión de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba; y, 4. Explicar y demostrar cómo la aplicación indebida, falta de aplicación o la errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a dicha valoración probatoria han conducido a la afectación de normas de derecho, ora por equivocada aplicación o por su falta de aplicación. En la especie, el recurrente, al singularizar la explicación de cada causal que invoca, únicamente transcribe la norma contenida en el artículo 3 de la ley de la materia y no más, por manera que como no existe casación de oficio en nuestra legislación no es posible extraer de su memorial de recurso qué normas procesales habrían sido afectadas y que, como consecuencia de ello pudiesen haberse afectado normas materiales. Quizá, el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil que cita y transcribe únicamente -sin fundamentar- en una descripción inicial generalizada de la cuestión, el mismo que consigna que "La prueba deberá ser apreciada en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. Por otro lado, en lo que se refiere a las reglas de la sana crítica, cabe recordar que la sana crítica constituye el juicio razonado sobre los hechos y que asume el juzgador, a través de la apreciación y valoración de las pruebas, de la exégesis de la ley, del uso de su experiencia, de las reglas de la lógica formal, de los principios de la ciencia y de la justicia universal, en este caso específico, además de las consideraciones ya anotadas, el interés superior por el niño. Por eso, para Eduardo Couture "las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez, unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas (Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Depalma, 1997, 3ra edición, páginas 270 y 271). En torno de la valoración de la prueba dos sistemas existen al respecto: el de tarifa legal de pruebas, llamado sistema legal y que impone al Juez una severa y preestablecida valoración de la misma; y, el otro, de libre apreciación que, concede al Juez, facultad para apreciar el valor o fuerza de convicción de las pruebas. Y ellas han quedado valoradas por el juzgador de instancia sin que sea permitido a este Tribunal, por último, provocar y practicar una nueva valoración. Por tanto, tampoco ha lugar a este cargo y por lo mismo se lo rechaza.

NOVENA: La parte demandada arguye también la causal primera, específicamente, falta de aplicación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto y que hayan sido determinantes en su parte dispositiva; causal que, doctrinariamente hablando se conoce con el nombre de vicios "in iudicando" y no permite apreciar la prueba actuada ni tampoco hacer una nueva consideración de los hechos que se dan por aceptados; apuntando sí, esencialmente, a la violación de normas propiamente, por no haberse subsumido los elementos fácticos en la hipótesis legal normativa. El recurrente, en su escrito de interposición del recurso, al pretender fundamentar las normas en que sustenta este causal, impropriamente menciona y fusiona normas constitucionales, sustantivas y adjetivas razón por la cual no es posible aquí realizar el control de legalidad en lo atinente a esta última causal -de las cinco que ha invocado-; pero que, en todo caso fueron ya motivo de análisis y rechazo por la Sala en las ordinales precedentes. Por las consideraciones precedentes, la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA", no casa la sentencia de la que se ha recurrido y que fuera pronunciada por la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la entonces Corte Superior de Justicia de Guayaquil el 1 de octubre del 2007, a las 9h47. Sin costas ni multas. Notifíquese y devuélvase.

f.) Dr. Carlos Ramírez Romero, Juez Nacional.



f.) Dr. Manuel Sánchez Zuraty, Juez Nacional

f.) Dr. Galo Martínez Pinto, Juez Nacional.

Certifico:

Que las cuatro copias que anteceden, son tomadas de sus actuaciones originales constantes en el juicio especial No. 143-2008 ex 3a Mas (R. No. 630-09) que, por alimentos y paternidad sigue María Lucía Barzola Rodríguez contra Luis Aníbal Peñafiel Mejía.- Quito, 22 de enero del 2010

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator..